

DOCUMENTO DE PROCESO – MARZO 2026

ESTUDIO DE CASO: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CHILE DESDE LA EXPERIENCIA DE LA RED CHILENA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Introducción

La lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres ha sido impulsada por el movimiento feminista chileno desde la década de los 80. Con la consigna “Democracia en el país y en la casa”, las mujeres y feministas de la época se manifestaron en contra de la dictadura, a la vez que posicionaron la violencia sexual y doméstica como un asunto de interés público, preguntándose si era posible la democracia sin asegurar una vida libre de violencia para las mujeres dentro de sus hogares.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se origina en 1990 a partir del ímpetu de organizaciones feministas como La Morada, el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena, Isis Internacional, Casa Yela, entre otras, por mantenerse articuladas ante la violencia específica que vivían las mujeres, tras el fin de la dictadura. La organización nace como “Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual” y cambia su nombre en 2010, a la luz de los aprendizajes y las elaboraciones conceptuales que reconocen la violencia como un continuo que se expresa de distintas maneras y ámbitos, manifestando así la incorporación de la violencia simbólica a sus reflexiones y acciones.

A la actualidad, las acciones que realiza la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se agrupan en las siguientes líneas de trabajo:

- Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones feministas en su rol social y político, mediante la **articulación y el trabajo en red**.
- Promover los derechos humanos de las mujeres y contribuir a la erradicación de la violencia mediante las **comunicaciones y acciones de incidencia pública**.
- **Producir conocimiento** que fomente, en todos los ámbitos, la transformación de los patrones culturales que sostienen la discriminación y la violencia como formas de relacionamiento entre las personas, en particular entre los hombres y las mujeres.

La acción de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se sustenta en el trabajo en red como estrategia. En sus 35 años de trayectoria, la han conformado diversas organizaciones de mujeres y feministas a lo largo del país, cuyo carácter es autónomo y se comprometen voluntariamente a participar de manera periódica en asambleas nacionales, espacios de encuentro que promueven la reflexión conjunta, el fortalecimiento de lazos y la coordinación de acciones. Dado ello, algunas de las organizaciones se articulan hace décadas y otras han cesado su participación, a la vez que no han dejado de incorporarse organizaciones nuevas, conformando así una red viva y móvil, en permanente transformación.

Al presente, participan de manera activa aproximadamente 30 agrupaciones que trabajan por la erradicación de la violencia hacia las mujeres en distintas localidades del país. Estas organizaciones son diversas respecto a lo siguiente:

- **Amplitud:** desde coordinadoras o redes feministas locales a colectivas que accionan por su cuenta.
- **Vínculo con el Estado:** algunas orientan su quehacer hacia el emplazamiento de la institucionalidad y/o el fortalecimiento de políticas públicas con enfoque de género, mientras que otras se abocan al trabajo comunitario.
- **Conformación:** todas las organizaciones se declaran feministas, en su mayoría integradas exclusivamente por mujeres. Algunas agrupaciones

específicas se han aperturado a la participación de personas no binarias y/o transmasculinas.

- **Formas de resistencia:** tienen diferentes focos de acción, como acompañamiento a situaciones de violencia, promoción de derechos sexuales y reproductivos, activismo, desarrollo de economías populares y solidarias, o educación popular.

Además de los encuentros nacionales, estas agrupaciones accionan de manera conjunta para la elaboración y difusión de la campaña “¡Cuidado! El machismo mata”, y para la organización del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La campaña, que inicia en 2007, ha sido estrategia fundamental para la continuidad de la organización, al posibilitar su difusión a nivel nacional e incentivar que nuevas colectivas se sumen al trabajo en red, a la vez que es un material útil para la sensibilización y la denuncia pública. No obstante, es importante señalar y considerar que la participación en estas acciones conjuntas siempre es variable, dado al principio de autonomía con que opera la red.

Respecto al estudio de caso, nos situamos en un escenario de cambio e incertidumbre, al encontrarnos durante el tránsito entre el gobierno progresista de Gabriel Boric y la instalación de la ultraderecha liderada por José Antonio Kast en el ejecutivo.

Los sectores de ultraderecha han utilizado el “antifeminismo” para conectar con diversos sectores de la población, luego de una década de algidez sostenida de movilizaciones feministas en el país, donde el concepto de “ideología de género” –al igual que en otros países de la región- se ha empleado como una estrategia de descredito y cuestionamiento a los derechos humanos de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas. Por ello, las agrupaciones que forman parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres son cuestionadas y sindicadas como parte de los espacios que fomentan la “ideología de género”.

En este momento, no es posible tener certezas de cuáles serán las medidas inmediatas o de corto y mediano plazo que tome la nueva administración, o cuál será el impacto o alcance de estas sobre el trabajo y accionar de la organización, así como tampoco de las transformaciones culturales y sociales que podrían producirse, lo que le convierte en un caso estratégico de acompañamiento y estudio. Para ello, se han elaborado los siguientes supuestos iniciales que guían el estudio de caso:

- Hay un debilitamiento de los colectivos y comunidades de mujeres en Chile: ya sea por cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de las organizaciones en términos materiales y emocionales, como a los procesos sociales que se han producido en los últimos 5 años, que han derivado en cuestionamientos a los movimientos feministas y/ o con enfoque de género.
- Hay incertidumbre frente a los resultados del escenario que implica la llegada de un gobierno de corte de ultraderecha.
- Precarización de la vida y miedo ante el escenario político (entrada un gobierno de corte ultraderecha) y otros frentes que ponen en alerta la vida libre de violencias de las mujeres, niñas y adolescentes (como lo es la instalación del narco – crimen organizado)
- Las colectivas/comunidades que se mantienen están haciendo esfuerzos muy sustantivos con muchos recursos voluntarios, precarizándose y con dudas sobre su futuro.

1. El contexto político social en que se sitúa el estudio de caso

1.1. El escenario electoral (noviembre - diciembre 2025)

En los últimos cinco años, se constata la creciente visibilidad y posicionamiento mediático y social de nuevos referentes político partidistas en el país, lejos del eje tradicional en que se articuló el juego de poder entre una derecha neoliberal y el frente más progresista de corte centro izquierda (desde la Concertación hasta el último gobierno del Presidente G. Boric): los partidos

Republicano y Libertario (una derecha extrema, centradas en figuras—líderes masculinos), y el Partido de la Gente, de corte neoliberal y populista.

En el primer caso, se trata de referentes políticos que han cuestionado desde sus inicios el rol de Estado, las políticas públicas garantistas de los derechos sociales y por sobretodo, que han manifestado sus posturas anti-género y planteado posiciones que implican un retroceso en aspectos como los derechos sexuales y reproductivos (incluyendo el derecho al aborto en sus tres causales, tal como se lo reconoce en el país), la educación no sexista y la educación sexual integral, la existencia de la institucionalidad sobre género (el actual Ministerio de la Mujer y Equidad de Género), y por lo tanto, el resguardo del marco legal y jurídico que garantiza actualmente la implementación de la Ley N° 21.675 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Se observa de parte de dirigentes de estos sectores, el constante cuestionamiento a los enfoques feministas y el reconocimiento de las personas de diversidades sexo-genéricas, en especial en lo que respecta a la identidad de género. En el marco de las elecciones, los programas de los candidatos presidenciales de ambos partidos posicionaron “la batalla cultural” contra “la ideología de género” que, según ellos, es responsable de la erosión de los vínculos familiares y sociales. Ahora bien, a diferencia de elecciones pasadas, si bien incorporaron medidas orientadas específicamente hacia las mujeres, estas no están enmarcadas desde un enfoque de derechos, sino que para reforzar su rol histórico de “madres” y encargadas de manera desmedida del trabajo doméstico y de cuidados dentro del hogar¹.

En el segundo caso, la posición del Partido de la Gente (PDG) es similar en cuanto al rol del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, siendo parte de sus propuestas de campaña la fusión de la cartera con el Ministerio de Desarrollo Social.

¹ Priscila González, “Elecciones presidenciales y parlamentarias: una mirada desde la violencia hacia las mujeres”, *Radio Universidad de Chile*, 14 de noviembre de 2025.

Sin embargo, su programa no tiene una “agenda moral”, y más bien asume una posición de sospecha hacia las mujeres, quienes principalmente son denunciantes de violencia intrafamiliar y violencia sexual, mediante la promoción del Proyecto de Ley de Crianza Compartida (del año 2021) , en alianza con la Fundación Crianza Compartida, y el Proyecto de Ley contra Falsas Denuncias² en el ámbito de Familia, respaldado por datos del Centro Jurídico de Hombres Maltratados.

En este marco, el partido propone medidas específicas, como el reconocimiento legal de la Alienación Parental como forma de violencia intrafamiliar, pese a que está documentado la falta de estudios para respaldar el fenómeno y más bien su uso instrumental para profundizar la violencia hacia las mujeres³; la videograbación de procedimientos periciales hacia niñeces, al ser “la principal herramienta para justificar la separación de niños de sus familias, especialmente padres, abuelos o tíos”; y fortalecer el deber de objetividad en procesos de evaluación de delitos sexual, para “evitar la validación automática de un solo relato”.

Es clave destacar que la figura principal del Partido de la Gente, Franco Parisi, mantuvo una deuda millonaria de pensión de alimentos que repactó tras años de no pago, lo que constituye una forma de violencia económica; como también que fue despedido de dos universidades en Estados Unidos por acoso sexual contra estudiantes. El candidato logra conectar con un perfil de votantes, varones, que se reconocen “damnificados” por los avances en materia de derechos de las mujeres, por la instalación de sentidos comunes respecto a dicha violencia como un hecho intolerable, y diversas acciones de denuncia promovidas por el movimiento feminista⁴.

² Ver detalles del proyecto en la web <https://www.leydenunciasfalsas.cl>

³ Alexandra Correa, “Alienación Parental”, factor de violencia contra la mujer”, DW, 17 de agosto de 2023.

⁴ Priscila González, “Elecciones presidenciales y parlamentarias: una mirada desde la violencia hacia las mujeres”, Radio Universidad de Chile, 14 de noviembre de 2025.

Además, los dos sectores de la ultraderecha se caracterizan por profundizar otras formas de violencia como lo son: los extractivismos ambientales y las consecuencias del cambio climático, el racismo contra personas migrantes y pueblos originarios, la precarización del trabajo, entre otros.

1.2. Transición hacia un gobierno de ultraderecha (diciembre – marzo 2026)

La votación le dio el triunfo al candidato del partido republicano José Antonio Kast, por mayoría absoluta (58,16% de los votos). De acuerdo a algunos análisis preliminares, se señala que Kast capitalizó el descontento ciudadano y la demanda de orden, ante la baja aprobación del gobierno de Gabriel Boric, que llegó a un 35% de aprobación al final de su mandato. La campaña política de la segunda vuelta estuvo marcada por una narrativa comunicacional y de promesas focalizadas en preocupaciones ciudadanas sobre seguridad pública, delincuencia, inmigración irregular y recuperación económica del país⁵.

Este último tema se constituyó a la fecha como un punto central de tensión entre el gobierno saliente y el entrante⁶, y de controversia pública, política y mediática antes del cambio de mando, en el período de transición. Este ha sido, además, el principal argumento de la administración de Kast para justificar el recorte presupuestario de US\$6 mil millones que actualmente está en plena ejecución, y que ha posicionado desde el inicio bajo el lema “gobierno de emergencia”.

Los resultados de la votación implicaron que la transición de un gobierno progresista a uno de ultraderecha generara un escenario de incertidumbre sobre la justicia social y los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ+, migrantes, indígenas y afrodescendientes, en tanto podrían ser limitados o eliminados radicalmente.

⁵ En materia económica, el déficit fiscal de 2025 llegó al 3,6% del PIB, equivalente a US\$13.200 millones, y el desempleo alcanzó niveles históricamente altos, como referencia ver la información de la Dirección de Presupuesto DIPRES <https://www.dipres.gob.cl/598/w3-article-404481.html>

⁶ Referencia sobre el debate del déficit fiscal <https://elpais.com/chile/2026-02-17/el-deficit-fiscal-abre-un-nuevo-flanco-entre-el-gobierno-de-boric-y-la-futura-administracion-de-kast.html>

En el plano legislativo, también las elecciones fueron un cambio importante en materia de representación de partidos y fuerzas políticas. Las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre de 2025 se realizaron con una participación histórica del 85,40% del padrón electoral, la más alta en la historia de Chile, impulsada por el regreso del voto obligatorio⁷. Esto significó un salto de 7,1 millones de electores en 2021 a más de 13,4 millones en 2025. El partido oficialista, el Republicano, obtuvo mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo anterior constituye además un cambio de fuerzas políticas radical, en relación a la última votación parlamentaria.

El pacto Cambio por Chile que lideran los Republicanos -junto a los Libertarios de J.Kaiser y el Partido Social Cristiano (de corte evangélico)- ha pasado de 15 a 42 diputados. Junto a la derecha tradicional, que bajó a 34, se quedan con 76 parlamentarios de un hemicycle de 155. La lista del Partido de la Gente (de corte populista y liderado por el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales, Franco Parisi), alcanzó 14 escaños, siendo que en las elecciones pasadas no había logrado obtener ninguno. En la Cámara Alta, en tanto, el pacto de Kast sube de uno a siete senadores. Junto a la derecha tradicional, que llega a los 18, alcanzarán 25 senadores de 50. En el Senado, por lo tanto, la derecha opositora a Boric ha perdido la actual mayoría que gozaba⁸.

Este nuevo escenario parlamentario refleja una profunda fragmentación política en la que ningún bloque cuenta con mayoría propia, lo que hace que la gobernabilidad legislativa dependerá de acuerdos transversales permanentes. Además, es importante señalar que en el proceso, mientras el Partido de la Gente y el Partido Libertario se consolidan como partidos políticos,

⁷ Referencias sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Biblioteca Congreso Nacional <https://www.bcn.cl/portal/noticias?id=conozca-los-resultados-de-las-elecciones-generales-2025>

⁸ Referencia sobre este giro parlamentario en <https://elpais.com/chile/2025-11-17/el-partido-republicano-de-kast-triunfa-en-la-camara-de-diputados-y-en-el-senado-chileno.html>

desaparecieron 13 partidos, incluyendo: el Radical, Evópoli, Federación Regionalista Verde, Demócratas, Social Cristiano, Movimiento Amarillos por Chile⁹.

1.3. 11 de marzo de 2026: la llegada de el "Gobierno de Emergencia"

Kast ha definido su gobierno como "de emergencia", con prioridad para los primeros 90 días en un conjunto de medidas en materia de seguridad, migración, temas sociales y materias económicas. Este concepto se articula en tres ejes principales:

- a) Emergencia en seguridad: El primer día de gobierno, Kast firmó seis decretos e instructivos enfocados en control migratorio, seguridad y permisología, además de una auditoría interna al Estado. Entre ellos, el Plan Escudo Fronterizo, que declara formalmente Zona Militar el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, con uso de drones, sensores y barreras físicas. También se instruyó el aumento de dotación de Carabineros, la aceleración de la Ley de Inteligencia y el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad.
- b) Emergencia migratoria: La inmigración ilegal ocupó un lugar central en los primeros anuncios. Kast solicitó a las Fuerzas Armadas construir barreras fronterizas a lo largo de la frontera con Bolivia y firmó tres decretos relacionados con ese objetivo durante su primer día. Se impulsó además una Ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo, y una fuerza de tarea conjunta tomará el control de la frontera norte con facultades para detener y expulsar migrantes irregulares.
- c) Emergencia económica: En materia económica, Hacienda instruyó un recorte del 3% del gasto público como parte de un ajuste fiscal de US\$6.000 millones, comunicado a todas las reparticiones del Estado en febrero de 2026. Además, Kast instruyó resolver los atrasos en la tramitación de permisos ambientales del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto

⁹ Referencia Servicio Electoral de Chile <https://www.servel.cl/elecciones-2025/>

Ambiental), que mantienen bloqueadas inversiones por cerca de US\$16.000 millones en 51 proyectos pendientes.

El nuevo gobierno asumió sin una mayoría parlamentaria absoluta, lo que obligará a Kast a mantener la concordia dentro de una derecha parlamentaria fragmentada y a negociar con fuerzas bisagra como el Partido de la Gente en la Cámara baja. Analistas señalan que el principal desafío no es solo anunciar medidas, sino transformar el impulso inicial en gobernabilidad efectiva en un escenario político polarizado.

Dando inicio a su denominado "Gobierno de Emergencia", Kast firmó sus primeros decretos desde el Palacio de La Moneda el mismo 11 de marzo, previo a su primer discurso como jefe de Estado. En total, fueron seis las medidas, enfocadas en materias de control migratorio, seguridad, permisología y auditoría interna al Estado.

- a) Seguridad y control fronterizo: El primer decreto estableció una Política Nacional de Cierre Fronterizo, con la delimitación geográfica del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia para su declaración formal como Zona Militar. La política, implementada en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, contempla el incremento de medios militares en sectores críticos, vigilancia mediante drones y sensores optrónicos, y el mejoramiento de comunicaciones en zona fronteriza. El sexto decreto correspondió al Plan Escudo Fronterizo, que pone al Ejército al mando de la protección de la zona norte, estructurado en cuatro ejes estratégicos: protección fronteriza, integración institucional entre Interior, Defensa y Seguridad Pública, modernización tecnológica, y reconducción y rechazo de ingresantes irregulares conforme al marco legal.
- b) Comisionado para la Macrozona Norte: se designó al vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial para las regiones de Arica

y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, con facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales.

- c) Auditoría total al Estado: se instruyó una auditoría amplia y profunda a todos los ministerios e instituciones del Estado, como mecanismo para establecer una línea de base técnica y política que permita detectar irregularidades de inmediato. La fuerza de tarea creada para este fin incluye a los subsecretarios de Interior, Hacienda y Segpres (Secretaría General de la Presidencia), con reporte directo al Presidente.
- d) Destrabe de inversiones: Kast firmó un decreto para resolver los atrasos en tramitación de permisos ambientales en el SEIA. Según la nueva administración, existen 51 proyectos pendientes asociados a inversiones por cerca de US\$16.000 millones, por lo que se encargó a la ministra del Medio Ambiente un diagnóstico y propuesta para abordar las reclamaciones pendientes.
- e) Reconstrucción: mediante decreto supremo, se asignó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, la responsabilidad de liderar la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales en Valparaíso (ocurridas en febrero de 2025), Ñuble y Biobío (ocurridas en febrero 2026), desburocratizando subsidios y concentrando la gestión para acelerar la respuesta. Entre las medidas más debatidas se incluyen: una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, ajustes al sistema de gratuidad universitaria, y la apertura del debate sobre eventuales indultos a funcionarios del Estado. En materia fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó un ajuste de gasto en los ministerios por US\$4.000 millones, reconociendo que "la situación de caja es compleja y alarmante" ante el déficit fiscal de 3,6% del PIB heredado del gobierno anterior.

El pasado 26 de marzo, otro golpe directo al bolsillo ciudadano fue la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles

(Mepco). A partir de la tercera semana de marzo, la gasolina de 93 octanos subió \$370 por litro (un alza del 32%) y el diésel aumentó \$580 por litro (más del 60%). El gobierno atribuyó la medida al contexto de la guerra en Medio Oriente y a la estrechez fiscal heredada.

Mientras el oficialismo valoró la celeridad del gobierno en enfrentar la reconstrucción, desde la oposición se acusó que se estaban incorporando reformas que benefician a los más ricos y perjudican a la clase media, usando la catástrofe como pretexto.

La crisis del Mepco y la medida del alza de combustibles ha profundizado la tensión, lo que además se agudizó con la puesta en marcha de una campaña comunicacional en redes sociales del gobierno, que indicaba que la razón para tomar esta decisión era la referencia a un “Estado en quiebra” (ver la imagen de referencia en post). La contraloría general de la República requirió vía oficio al Ministerio Secretaría General de Gobierno, que lidera Mara Sedini, que informe en un plazo de cinco días hábiles, respecto de las publicaciones en redes sociales sobre las medidas vinculadas al alza de los combustibles. Las publicaciones fueron eliminadas de las cuentas oficiales de @gobiernodechile y @voceriadegobierno.



Imagen del posteo en IG de @voceriadegobierno sobre el estado chileno en quiebra

1.4. Nuevas medidas en materia de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio de la Mujer y el perfil valórico del gobierno

Para liderar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Kast designó a Judith Marín, profesora y referente evangélica, vinculada al Partido Social Cristiano, uno de los partidos que posteriormente fue disuelto al no superar el umbral electoral. El nombramiento fue leído por organizaciones feministas como una señal programática sobre la orientación valórica que tendría la cartera, alejada de los marcos de género, diversidad e interseccionalidad que habían guiado al ministerio en los gobiernos anteriores.

Actualmente se está en proceso de cambio del cargo de las Secretarías Ministeriales para las regiones, en las que se puede observar una tendencia de nombramiento de mujeres con un corte conservador. Un hecho que ha tenido impacto público es el despido del cargo de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer- SERNAMEG, quien había sido seleccionada por el mecanismo de postulación de Alta Dirección Pública¹⁰.

Durante marzo se observó que una constante ha sido que, a través del instrumento “resoluciones exentas” (decreto administrativo), se ha dejado sin efecto la creación de las unidades de género en reparticiones públicas como el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Estadísticas, junto con retirar la Política de Defensa con perspectiva de género, que habría ingresado durante la administración de Gabriel Boric¹¹.

En paralelo, analistas advirtieron que bajo la lógica del recorte del "gasto ineficiente", los programas que con mayor frecuencia quedan fuera de las prioridades presupuestarias son precisamente los de género, diversidad y cultura,

¹⁰ <https://www.soychile.cl/valparaiso/sociedad/2026/03/30/945377/diputada-renuncia-directora-sernameg-cancer.html>

¹¹ Referencia de la medida en la nota de T13.cl <https://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-retira-politica-defensa-ingresada-boric-consagraba-perspectiva-genero-24-3-2026>

por ser vistos por el sector como expresiones de una agenda ideológica de izquierda antes que políticas públicas esenciales. El propio programa presidencial de Kast contempla la fusión del Ministerio de la Mujer con el de Justicia, reduciendo de 25 a 14 el total de ministerios, lo que tensiona la continuidad institucional de las políticas de equidad de género.

El hecho más contundente y a la fecha, ocurrió el 19 de marzo de 2026. En el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos) celebrada en Washington D.C., el gobierno de Kast decidió no apoyar la declaración del Grupo Núcleo LGBTIQ+, organismo del cual Chile es uno de sus países fundadores desde 2016¹².

El Movilh (Ong Movimiento de Liberación e Integración Homosexual) calificó la decisión como un severo retroceso, señalando que es la primera vez que Chile no apoya una declaración pro derechos LGBTIQ+ en la OEA, lo que implica un quiebre con la histórica posición del país en favor de la igualdad y la no discriminación, debilitando su credibilidad internacional en materia de derechos humanos. Esta postura contrasta con la línea adoptada por administraciones anteriores, incluyendo la del expresidente Sebastián Piñera, quien había apoyado activamente este tipo de iniciativas. La Cancillería argumentó que el lenguaje del documento generaba "división" en lugar de unidad regional, y que Chile intentó modificar la redacción del texto para facilitar una adhesión consensuada, pero obstáculos de procedimiento lo impidieron.

El episodio también dejó en evidencia una contradicción interna: mientras la delegación chilena ante la OEA reafirmó el compromiso del país con los derechos humanos y reconoció la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario como avances, estas son precisamente dos iniciativas a las que Kast se opuso antes de llegar a La Moneda. Para el Movilh, esta dualidad refleja una postura ambigua: se valoran los avances ya consolidados, pero no se defienden activamente en el plano

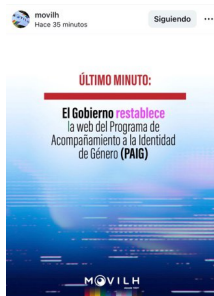
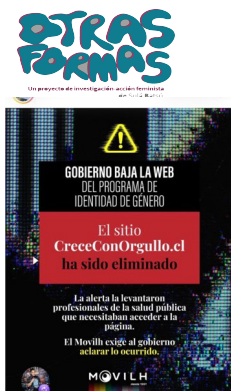
¹² <https://elpais.com/chile/2026-03-20/el-gobierno-de-kast-decide-no-adherir-a-la-declaracion-de-derechos-lgbtq-en-la-oea.html>

multilateral. La Fundación Iguales fue más directa en su crítica, en una publicación realizada en su cuenta de Instagram: "Esta decisión no es un tecnicismo diplomático. Es una señal política deliberada: que para este gobierno, los derechos de las personas LGBTIQ+ son negociables. Y esa señal tiene consecuencias reales para las personas, para la sociedad civil, y para el lugar de Chile en el mundo."¹³

Otra situación de alerta ocurrió el 26 de marzo de 2026. La plataforma web del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) (crececonorgullo.cl) —creado por ley vigente y dependiente de la Subsecretaría de la Niñez— estuvo caída durante varias horas, lo que desató reacciones inmediatas de organizaciones de la sociedad civil, una diputada y la exministra Antonia Orellana. La Fundación Iguales alertó que el sitio había sido eliminado, señalando que este programa es requisito legal para que jóvenes trans puedan rectificar su identidad registral y que su desaparición debilita el acceso a un derecho garantizado por ley.

El gobierno descartó que la caída hubiera respondido a una decisión deliberada, atribuyéndola a razones técnicas ajenas a la Subsecretaría, y restableció la plataforma rápidamente. Sin embargo, el incidente fue interpretado por la sociedad civil como sintomático de la fragilidad institucional de los programas de diversidad bajo la nueva administración.

¹³ Referencia en https://www.instagram.com/p/DWEcwynDv_q/?igsh=MTFuNGN1MnhkcXluaQ%3D%3D



Imágenes de IG de la cuenta del @movilh denunciado la caída de la web Crececonorgullo.cl

En otro tipo de institucionalidad, el programa InES Género —concurso de Innovación en Educación Superior ejecutado por la ANID desde el Ministerio de Ciencia— fue creado específicamente para disminuir las brechas de género en los ámbitos de I+D+i en las instituciones de educación superior. Su objetivo es desarrollar capacidades institucionales para implementar planes que redujeran la desigualdad de género en la investigación científica y el emprendimiento de base tecnológica.

En el proceso presupuestario, el gobierno identificó que el programa InES carecía de un diseño adecuado y registraba subejecución persistente entre 2022 y 2024, por lo que propuso una reducción de su presupuesto del 17,1%, dejándolo con recursos por cerca de \$9.000 millones. La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, anunció ante la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados que el programa INES sería terminado el año siguiente, argumentando que existía duplicidad con el Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario (FIU) creado por el gobierno anterior, el cual sí continuará. Según la ministra, la inversión se reorientará para integrar el INES al FIU.

La comunidad científica y académica ha recibido esta noticia con preocupación. Expertos en ciencia, tecnología e innovación advirtieron que debilitar



la institucionalidad del Ministerio de Ciencia y sus programas de equidad significaría un retroceso para el capital humano y la competitividad del país, especialmente en un contexto de revolución tecnológica global donde la participación de mujeres en ciencia y tecnología es estratégica. La Red de Investigadoras de Chile (RedI) ha levantado una declaración señalando “que estos avances se han articulado con años de trabajo entre comunidades académicas, organizaciones sociales y políticas públicas orientadas a la transformación del sistema. Su debilitamiento compromete la posibilidad de consolidar espacios educativos y laborales libres de violencia y discriminación, así como avanzar en condiciones más justas para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país”¹⁴.

A esto se sumó la decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, lo que desató acusaciones de "cortina de humo" desde la oposición para desviar la atención de la crisis de combustibles, y generó la crítica de que se rompían puentes de diálogo con fuerzas que habían apoyado esa candidatura, incluidos senadores del propio oficialismo.

2. La experiencia de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

2.1. El movimiento feminista ante el escenario político social

En las dos asambleas nacional que se han realizado durante la ejecución del proyecto, además del Círculo de Mujeres realizado con la Coordinadora Feminista de Ñuble, se identifica que las agrupaciones que integran la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres reconocen que: i) el proyecto político de ultraderecha es internacionalista y, ii) no se despliega solo a nivel institucional, sino que también en lo cultural, mediático y territorial, en búsqueda de permear el sentido común.

En particular, la seguridad pública ha sido vehiculizada para normalizar soluciones autoritarias y punitivistas, pero omite que Chile está lejos de ser el país

¹⁴ Ver la declaración de la Red de Investigadoras en el Instagram @reddeinvestigadoras
<https://www.instagram.com/reddeinvestigadoras>

de América Latina con mayores índices de criminalidad y delincuencia¹⁵, y que la mitad de la población, las mujeres, mayoritariamente son víctimas de violencia intrafamiliar. A ello se suma que tanto los adscriptores del partido Republicano como del Libertario refuerzan la retórica autoritaria mediante el apoyo explícito a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, a través del enalzamiento de la figura del dictador, la defensa de otros criminales de lesa humanidad y la normalización de la violencia estatal como forma de solución posible a problemas políticos y sociales.

Por otro lado, el “antifeminismo” que posiciona ideológicamente la ultraderecha también se traduce en formas concretas de hostigamiento, en el marco de acciones públicas feministas, mediante vías legales (por ejemplo, a través de denuncias por injurias y calumnias en contra de activistas que denuncian violencia de manera pública) y en medios digitales. La masificación de este tipo de situaciones y las lógicas asociadas al surgimiento de grupos y colectivos conocidos como “manosfera”, evidencian nuevas formas de ataques coordinados hacia organizaciones feministas o activistas particulares.

Estas formas de hostigamiento resultan desmovilizadoras, tanto por el desgaste emocional que producen, como por la necesidad de orientar herramientas judiciales, digitales y/o económicas a la defensa o resguardo de las activistas. Dentro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se registra que algunas organizaciones ven disminuida su capacidad de acción en la reorientación de energías hacia la defensa de sus compañeras, se repliegan por un período de tiempo o de ciertos espacios, o bien, en los peores casos, se disgregan. Sin embargo, también se observa que el trabajo en red y la vinculación con otras organizaciones posibilita el apoyo mutuo y la reactivación de esfuerzos, constituyéndose en una estrategia clave de resistencia.

¹⁵ Gerardo Lissardy, “Chile está extremadamente atemorizado. Pero está lejos de ser el país con el mayor problema por crimen y violencia”, *BBC News*, 11 de noviembre de 2025.

Previo al escenario electoral, algunas de las agrupaciones se manifiestan desmotivadas y atemorizadas, pero también otras que proyectan la necesidad de consolidar un horizonte político feminista transformador, que se sustente en la construcción de redes de afecto, apoyo y acción autónoma a la política institucional, que se contraponga a los discursos neoliberales de éxito que propician el consumo y las respuestas individualistas. Pese a que ha gobernado un partido progresista durante los últimos cuatro años, no se ha logrado impulsar un proyecto político de izquierda que sea una alternativa real y transformadora, siendo las mujeres un grupo particularmente precarizado y empobrecido. Las activistas feministas no son ajenas a este empobrecimiento, siendo también parte de las amenazas que enfrentan las colectividades para asegurar su continuidad.

Con el proceso de cambio de gobierno se observa también un tránsito hacia un nuevo ciclo por parte del movimiento feminista, tras el fin de la energía movilizadora que empezó el 2015 con las marchas de Ni Una Menos y que llegó a su cúspide entre el Mayo Feminista de 2018 y la Revuelta de Octubre en 2019, pero que luego se desarticulan durante la pandemia y a propósito de los procesos fallidos de cambio constitucional, que dejó un profundo desgaste en los movimientos sociales que se involucraron.

Por ello, luego de las elecciones, y el contexto de los preparativos para la convocatoria anual del 8 de marzo, se producen una serie de encuentros entre organizaciones de distinta índole, entre enero y febrero de 2026. En los espacios que participó la Coordinación Nacional en la región Metropolitana, se constató una cierta expectativa y una sensación de ansiedad –como una especie de primera prueba de los movimientos sociales- respecto a la convocatoria y las posibilidades de articulación a futuro.

Pese a que se espera producir un diagnóstico colectivo de las primeras semanas de gobierno en la próxima Asamblea Nacional a fines de abril, se vislumbra una posible reactivación impulsada por la urgencia de accionar ante el

avance de la ultraderecha, el incipiente desmantelamiento de la institucionalidad que garantiza los derechos humanos de las mujeres y las potenciales transformaciones culturales que podrían producirse a propósito del giro valórico que promueve el nuevo gobierno.

El 8 de marzo en Chile marcó el inicio del año con convocatorias en las principales ciudades del país, bajo distintas consignas. Particularmente en Santiago, se estima que asistieron 500 mil personas¹⁶ a la marcha que repletó la Alameda. Luego, el 22 de marzo, para la marcha por el Día del Agua, se reenmarcó la convocatoria para alertar y protestar contra el retiro de varios decretos de protección ambiental por parte del gobierno¹⁷.

Por su parte, la Asamblea de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) convocó a la primera marcha de estudiantes secundarios el jueves 26 de marzo, a la que se sumaron estudiantes y organizaciones universitarias, en rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno en las semanas pasadas. Con la consigna “Contra el retroceso, marchamos”, tuvo por objetivo volver a poner en el debate las demandas por una educación gratuita y de calidad, la condonación de la deuda universitaria y el aumento de la beca de alimentación¹⁸.

2.2. Estrategias a fortalecer ante contextos de incertidumbre

Los escenarios que enfrentamos nos han impulsado a una reestructuración interna no menor, pasando de una etapa de mayor soltura y proyectos diversos, a una de prioridades más claras y cautela tanto física y digital, como financiera. Durante el gobierno progresista, Chile parecía ser un país que no necesitaba recursos, lo que significó una merma en los apoyos internacionales, dejándonos en

¹⁶ Referencia <https://radio.uchile.cl/2026/03/08/balance-8m-coordinadora-8m-cifra-en-mas-de-600-mil-las-asistentes-a-la-marcha/>

¹⁷ Referencia <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/dia-mundial-del-agua-marcha-medioambiental-protesto-contra-medidas-del/2026-03-22/122755.html>

¹⁸ Referencia <https://radio.uchile.cl/2026/03/26/contra-el-retroceso-marchamos-secundarios-se-manifiestan-contra-medidas-del-gobierno/>

una posición de mayor vulnerabilidad económica que, paradójicamente, nos ha forzado a enfocarnos en lo esencial frente a la ultraderecha.

La ultraderecha ya no es una posibilidad lejana o un mito, sino aparece concretamente como una red internacional articulada que comparte "recetas" de opresión, represión y enriquesimiento oligárquico-empresarial. Esta toma de conciencia sobre cómo operan y se coordinan globalmente ha transformado nuestra lectura del presente, obligándonos a abandonar la ingenuidad y a reforzar nuestro entendimiento, que la disputa hoy no es solo por políticas públicas, sino por transformaciones culturales profundas y la defensa directa de nuestra integridad frente a un control policial y político mucho más estricto.

Por ello, una de las estrategia prioritarias que se proyectan es el fortalecimiento de la seguridad integral, tanto en el plano digital como en el organizativo, siendo probablemente necesario retomar debates anteriores que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha tenido sobre el concepto de autodefensa y las formas en que los feminismos podemos comprenderla.

Las herramientas digitales, a las que antes se incentivaban con entusiasmo, son armas de doble filo que el fascismo utiliza con eficacia para la vigilancia. En consecuencia, la modernización de la seguridad digital —migrando de plataformas vulnerables como WhatsApp a herramientas más seguras como Signal— no es solo un cambio técnico, sino un acto político de resguardo. Existe una desconfianza necesaria y vigilante hacia las redes y plataformas digitales y su utilidad, entendiendo que la exposición desmedida pone en riesgo a las feministas y transfeministas frente a un Estado que hoy actúan con mayor impunidad y no se sabe si en el futuro pueda haber otros grupos de choque tanto en lo digital como en lo físico.

Si bien se quisiera profundizar en estrategias de perfeccionamiento y protección de las vocerías que son una prioridad, también se debe sopesar la fuerza que tienen las organizaciones que intentan un funcionamiento horizontal y la cual

radica en no depender de personalismos. El retirar los nombres del sitio web y mantener una estructura donde no existan figuras únicas, son medidas de seguridad que se han adoptado y las cuales forman parte de la estrategia hacia futuro de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

Se debate si las acciones en el espacio público también habrán de evolucionar: si antes, bajo gobiernos anteriores, se planificaron manifestaciones y tácticas de cierto nivel de choque directo en lugares simbólicos como encadenarse a La Moneda, el escenario actual de control policial estricto exige ser más medidas y estratégicas; pero a la vez profundamente presentes en el tejido social, como una voz potente en el espacio virtual y un referente en las calles con la Campaña “Cuidado El Machismo Mata” en su vigésima versión, ojalá presente en muchos rincones del país. Cuidar los recursos y cuidarnos entre nosotras para sostener la lucha a largo plazo.

2.3. Sobre las transformaciones en el marco del proyecto

En estos meses de trabajo del proyecto podemos identificar los siguientes hitos:

- La coordinación de la Red, está más activa en temas de seguridad digital organizacional, como una dimensión que emergió en los últimos meses. Se han realizado sesiones de formación sobre estrategias de seguridad y cuidado digital, en relación al uso de dispositivos, redes sociales y plataformas digitales de comunicación y trabajo (personales y de la organización). Se proyecta una segunda etapa en que se socialicen estos aprendizajes con las demás colectivas que integran la organización.
- La realización del círculo de mujeres en la zona de Chillán, Ñuble, con la Coordinadora Feminista de Ñuble, fue un espacio significativo porque permitió el reencuentro presencial y la reconexión con integrantes que se encontraban alejadas del trabajo de la colectiva. Esta localidad es

significativa porque es el territorio donde tienen su mayor base los partidos de ultraderecha.

- Se están reorganizando los quehaceres organizacionales para cuidar y optimizar los recursos en líneas de trabajo que se han definido como prioritarias para la Red bajo este contexto.
- Se ha profundizado en la comprensión colectiva que se tiene sobre la ultraderecha como proyecto político.